

**ECUADOR**

# Debate

## **CONSEJO EDITORIAL**

José Sánchez-Parga, Alberto Acosta, José Laso Ribadeneira, Simón Espinosa, Diego Comejo Menacho, Manuel Chiriboga, Fredy Rivera, Jaime Borja Torres, Marco Romero.

## **DIRECTOR**

Francisco Rhon Dávila  
Director Ejecutivo CAAP

## **EDITOR**

Juan Carlos Ribadeneira

## **ECUADOR DEBATE**

Es una publicación periódica del Centro Andino de Acción Popular CAAP, que aparece tres veces al año. La información que se publica es canalizada por los miembros del Consejo Editorial. Las opiniones y comentarios expresados en nuestras páginas son de exclusiva responsabilidad de quien los suscribe y no, necesariamente, de ECUADOR DEBATE.

## **SUSCRIPCIONES**

Valor anual, tres números:

EXTERIOR: US\$. 18

ECUADOR: S/. 21.000

EJEMPLAR SUELTO: EXTERIOR US\$. 6

EJEMPLAR SUELTO: ECUADOR S/. 7.000

## **ECUADOR DEBATE**

Apartado Aéreo 17-15-00173-B Quito, Ecuador.

Redacción: Diego Martín de Utreras 733 y Selva Alegre, Quito.

Se autoriza la reproducción total y parcial de nuestra información, siempre y cuando se cite expresamente como fuente a ECUADOR DEBATE.

## **PORTADA**

Magenta Diseño Gráfico



# ECUADOR DEBATE

# 34

Quito - Ecuador, abril de 1995

## EDITORIAL

### COYUNTURA

- Coyuntura Nacional: El conflicto fronterizo marca la coyuntura económica / 7 - 19  
 Coyuntura Política: El conflicto territorial Ecuador Perú: Más allá de los nacionalismos / 20 - 29  
 Conflictividad: El conflicto: octubre 1994 - enero 1995 / 30 - 41  
 Coyuntura Internacional: El escenario de la "crisis del siglo XXI" en México / 42 - 56  
 EQUIPO DE COYUNTURA -CAAP-

### TEMA CENTRAL

- De la violencia urbana a la convivencia ciudadana / 59 - 78  
 FERNANDO CARRION M.  
 Crisis económica y violencia social / 79 - 95  
 MILTON MAYA DIAZ  
 Hemos hecho el relato del espectáculo, ahora lo encarnamos / 96 - 99  
 JAVIER PONCE  
 Seguridad para la gente, o seguridad para el Estado? / 100 - 115  
 ALVARO CAMACHO GUIZADO  
 Violencia y sociabilidad: Tendencias de la actual coyuntura urbana en el Brasil / 116 - 129  
 LUIS ANTONIO MACHADO DA SILVA  
 La guerra interminable: Fundamentos de la idea de seguridad nacional / 130 - 140  
 ADRIAN BONILLA

### PUBLICACIONES RECIBIDAS

R224 RW 9838 E3-

## **DEBATE AGRARIO**

Cuestiones distributivas en la economía ecológica / 145 - 164

JOAN MARTINEZ ALIER / JEANNETTE SANCHEZ

La economía política de la gestión ambiental en América Latina / 165 - 181

DAVID KAIMOWITZ

## **ANALISIS**

Modelos, ideologías del desarrollo y culturas políticas: Los casos de Chile y Nicaragua / 185 - 206

ROBERTO SANTANA

Opinión pública y partidos políticos / 207 - 222

FREDY RIVERA VELEZ

## **CRITICA BIBLIOGRAFICA**

Alimentación, género y pobreza en los andes ecuatorianos / 223 - 227

ROCIO VACA BUCHELI

**BIBLIOTECA**



# Editorial

Hemos querido dedicar la presente edición de Ecuador Debate, a un tema que súbitamente ha llamado el interés de nuestras ciencias sociales, quizás porque resulta inocultable en la realidad y porque clama una mejor intelección -al menos-, por parte de la sociedad entera. La importancia en aumento de la violencia en las ciudades latinoamericanas, privilegió siempre una mirada entre asombrada y conservadora, que muchas veces se unía a la más fría de la represión, justificando los excesos de una respuesta violenta a la violencia, que la asumía como una patología ajena e invasora, que nada tenía que ver con nosotros.

En realidad, lo que quieren gran parte de los artículos que hoy presentamos, es hacernos pasar del estupor ante las violencias que sufrimos o ejercemos, y mostrarnos que ellas están vergonzosamente juntas con la falta de predicción, lógica y hasta estética con que hemos dejado crecer nuestras ciudades estrepitosas: este es por ejemplo el intento de Fernando Carrión. O como, la violencia deja de ser un problema coyuntural y se convierte en uno estructural, perversamente adherido a la caída de los salarios, al desempleo, al empobrecimiento veloz, al abandono de lo social por lo privado, cuestión abordada por Milton Maya. Violencias que, observadas por Javier Ponce, se han convertido de tumultos repugnantes, en presas jugosas para los canales de televisión, que con impudicia las exhiben, sin contar que tras el violentador hay un hombre o una Mujer más bien víctimas de las exclusiones sin fin de este mundo; violencias y TV, ejercicio cruel de una pedagogía social que se ufana con reproducir esas mismas exclusiones.

Pero... y qué de las respuestas y ensayos de sofocación de la violencia que se conciben en las políticas de Estado? Alvaro Camacho desentraña los discursos y prácticas antiviolentas ideadas por el Estado colombiano que, hace de la violencia parte del repertorio de políticos y empresarios reclamando mayores garantías ante la agresividad latente de los pobres, mientras ese mismo Estado abdica de su papel de corrector de las inequidades y árbitro de conflictos. Con el trabajo de Luis Antonio Machado, se descubre que la violencia urbana en Brasil, ha logrado niveles imprevistos de sofisticación y eficacia porque disputa al Estado su monopolio en el uso de la violencia, hasta el punto de lograr niveles de organización que compiten con la policía por la hegemonía y el control de grandes áreas del crimen organizado

y el tráfico de drogas. Por último Adrián Bonilla, analiza las diferencias de concepción entre las doctrinas de seguridad nacional que rigen en los países del norte, y Ecuador: diferencias en la percepción del orden mundial, las relaciones entre Estado, paradigma de nación y sociedad, la creación y postulación de valores identificatorios y diferencias en el cómo, éstas doctrinas cierran o abren resquicios para relacionar la idea de seguridad con intereses alternos de las organizaciones de la sociedad civil.

En *Debate Agrario*, Joan Martínez Alier y Jeannette Sánchez nos traen un muy rico análisis de cómo la economía ecológica observa a la economía de mercado: ésta se encuentra inmersa en un sistema físico - químico - biológico, mucho más amplio. Por tanto, surge necesariamente la cuestión del valor de los recursos naturales y los servicios ambientales para la economía, intraducibles a valores monetarios. En la misma sección David Kaimowitz trata lo insostenible del patrón actual de desarrollo en América Latina por estar asociado con el uso y degradación de los recursos naturales renovables y no renovables, más rápido que lo que estos pueden ser producidos o sustituidos.

En nuestra sección de Análisis presentamos un artículo de Roberto Santana en el que interpreta a Chile y Nicaragua, enfrentadas al desafío del desarrollo y más ampliamente al desafío de la modernización del conjunto de sus estructuras socioeconómicas. A este artículo se suma uno de Fredy Rivera quien desentraña los diversos mecanismos comunicativos así como la puesta en escena de múltiples ámbitos discursivos en las campañas electorales, apelando y hasta secuestrando la sensibilidad de la opinión pública.

Cabe relieves en nuestra sección de Coyuntura el tratamiento de lo que ya se está denominando como "la crisis del siglo XXI" inaugurada en México. Destacamos también un pormenorizado análisis de los imaginarios que sobre el territorio y el concepto de nación se han tejido a lo largo de la conflictiva historia de nuestro país en sus relaciones y enfrentamientos armados con el Perú. Inauguramos con este número una nueva sección de Coyuntura que abordará en cada entrega un análisis de la conflictividad social suscitada en el país a lo largo del período.

*JUAN CARLOS RIBADENEIRA*  
*EDITOR*

## ***Modelos, ideologías del desarrollo y culturas políticas: Los casos de Chile y Nicaragua (\*)***

Roberto Santana

*Este texto es un ensayo de interpretación de dos realidades nacionales enfrentadas al desafío del desarrollo y más ampliamente al desafío de la modernización del conjunto de las estructuras socio-económicas.*

**L**os ejemplos que voy a tomar son representativos el uno, Chile, de aquellos países que comenzaron más temprano su incorporación a los procesos capitalistas de fines de siglo XIX y de este siglo, el otro, Nicaragua, de aquellos que lo han hecho más tardíamente y con más dificultades. En el centro de las interrogaciones a las cuales esta reflexión quisiera aportar algunos elementos de respuesta está la cuestión del desfazaje histórico que se observa en este siglo en cuanto al desarrollo de ciertos países en comparación con otros. A una escala comparativa más amplia, la misma problemática parece pertinente para poner en

relación países del Cono Sur con la mayoría de los países de América Central, o con algunos de los países andinos.

Interrogarse hoy, en la última década del siglo, acerca de la persistencia o no de la asimetría temporal con que los países entran a la definición y/o consolidación de un modelo de desarrollo, parece tener una pertinencia como nunca antes en la historia del capitalismo mundial. Esta pertinencia está fundada en la idea de la mundialización de las comunicaciones -con su cohorte de automatismo y rapidez en la información, en la transmisión de conocimientos y en la transferencia de tecnología- así como la universalización de los intercambios de

---

(\*) Versión preliminar de una intervención realizada con ocasión de la II conferencia Anual de ASERCA, celebrada en Maastricht (Holanda) entre el 8 y el 10 de octubre de 1993.

bienes y personas, crea nuevos espacios y posibilidades para la realización económica en los países periféricos. Una pregunta más concreta puede entonces enunciarse: Pueden, en este nuevo contexto, sino homologarse al menos aproximarse los tiempos y los ritmos del desarrollo de los diversos países de América Latina? Dicho de otra manera, se repetirá en este nuevo ciclo de la historia el desfazaje persistente que ha caracterizado el desarrollo de los países de América Latina en los ciclos económicos anteriores?

Los casos de Nicaragua y Chile, pueden ser vistos a comienzos de los 90 como teniendo una gran proximidad de problemática política: casi simultáneamente estos dos países iniciaron la transición desde un régimen político no-democrático (totalitario en el primer caso, autoritario en el segundo) a otro de corte democrático-liberal, debiendo al mismo tiempo enfrentar las tareas de la economía, la superación de la crisis y el aseguramiento de un desarrollo sustentable, es decir la puesta en ruta y la gestión de un modelo de desarrollo. Pero esta proximidad en los desafíos del presente tiene como telón de fondo profundas diferencias. Sin ir más lejos, el período inmediatamente precedente de dictadura militar en Chile y de régimen sandinista en Nicaragua estuvieron marcados ambos por la crisis económica (crisis que en el caso chileno comienza a superarse en los últimos años del régimen militar). Pero el signo de la crisis es diferente en uno y otro caso, de la

misma manera que su superación se plantea también diferentemente. A este propósito, a tal punto la diferencia es radical que es difícil resistir a la tentación de decir para el caso de Chile que los años 80 fueron una “década ganada”, mientras que, por el contrario, Nicaragua confirma la tesis cepaliana de una “década perdida”. Esta hipótesis será retenida como un hilo conductor importante en este ensayo.

Toda tentativa de análisis comparativo necesita de una unidad conceptual de reflexión y para el caso me parece útil hacerlo a partir de la noción de “modelo de desarrollo”, entendiendo éste como un momento o una etapa en la modernización de sociedades que ha seguido desde su formación la vía del desarrollo occidental (Hale, 1971). Tal noción permite, a mi juicio, aprehender mejor lo que sucede cuando los países de América Latina entran en otro ciclo de su propia historia y de la historia mundial. Por su misma definición su valor operatorio aparece como más elevado que la mera noción de reajuste estructural, en cuanto que esta última implica necesariamente una visión parcial de los desafíos sociales, está fuertemente cargada de economicismo, y su vigencia es necesariamente limitada en el tiempo, precisamente por estar marcando un reacomodo, una transición. En realidad, más allá de la coyuntura, lo que importa es lo que John Naisbitt (1984) designa como “megatendencias”, es decir, las líneas de fuerza emergentes de una confrontación en que una nueva

economía tiende a desplazar a otra, esta última reiterándose más o menos lentamente.

La idea de modelo de desarrollo que parece útil a nuestro propósito es aquella que permite tomar en cuenta la doble polarización constituida por la lógica propia de reproducción del capitalismo mundial y la lógica de reproducción de cada formación social nacional (Beaud, 1993). En esta visión, cada Estado responsable por la formación social nacional respectiva, debería ser capaz de desarrollar su propio modelo de autoregulación al interior del movimiento general del capitalismo. Este último debería ser concebido como una situación “dada” para cada país, a la vez como contexto pero también como un “input” indispensable a la auto-regulación nacional. Definida así, la noción de modelo puede concebirse como funcional para el análisis de los desarrollos particulares al interior del movimiento generado por el ciclo actual de la economía-mundo.

El ciclo en el cual se inscriben hoy los países periféricos está marcado por el neo-liberalismo, de la misma manera que el ciclo anterior fue marcado por el proteccionismo industrializante, que la segunda mitad del siglo pasado fue dominada por el libre-cambismo, o que, más lejos en la historia, la economía occidental estuvo marcada por el signo del mercantilismo. Esta manera de ver las cosas permite desde ya evacuar una primera cuestión: aquella de que el nuevo ciclo de la historia de América Latina está y estará “*bel et bien*” marcado por el neo-liberalismo, versión contemporá-

nea del liberalismo de otros tiempos, movimiento al cual la mayor parte de los trabajos recientes más importantes en previsión económica acuerdan una larga vida, los más prudentes haciendo predicciones cuya validez llega al 2015, los optimistas mirando al 2030.

El posicionamiento anterior supone por fuerza una interrogación relativa a la naturaleza de lo que puede ser un modelo “alternativo” en América Latina, tema acerca del cual ha corrido y corre todavía mucha tinta y sigue siendo la preocupación central de los sectores de oposición a las políticas de reajuste estructural. Lo que parece seguro, siguiendo la lógica de razonamiento que aquí se expone es que ellos, los modelos alternativos, no podrían sustituirse al neo-liberalismo como movimiento histórico de fondo, sino más bien constituir fórmulas de adaptación al interior del mismo, con lo cual el modelo alternativo adquiere más bien el perfil de un “modelo de regulación nacional” del nuevo proceso de acumulación.

El análisis de la capacidad de las elites para decantar una estrategia de desarrollo así como de su capacidad de “manejo” de la misma en un esquema coherente de regulación nacional puede, en hipótesis, arrojar resultados de gran utilidad comparativa, susceptibles de ser generalizados (guardando todas las reservas acerca de los peligros de la generalización), a condición que los parámetros seleccionados sean claramente definidos y que su peso en la relación causa efecto pueda ser estimado como relevante.



En un artículo publicado en Cahiers du Gemdev sugeríamos a propósito de la América Central que uno de los escollos mayores para el desarrollo de los países de esa área, estaba en las debilidades de la integración nacional, en la fragilidad identitaria y en la ausencia de voluntad política nacional (Santana, 1989). Aquí se trata de continuar en esa perspectiva, esta vez en relación a un país específico de la región, contrastando su realidad con una experiencia histórica nacional muy diferente. El análisis comparativo que aquí se propone se refiere, sin embargo, a un nivel más circunscrito del universo problemático entonces enunciado pues será conducido a la luz del comportamiento de los sistemas políticos nacionales frente al desafío del desarrollo, más precisamente, interesándonos en el tema de la cultura política de las elites y de la ideología del desarrollo que ellas asumen.

En relación con las culturas políticas de las elites nacionales (políticas y económicas) los puntos relevantes que tienen que ver con las "evidencias" sobre las cuales descansa la construcción simbólica del orden político (Lechner, 1993) y que a nosotros nos interesan, son principalmente dos: 1) la manera cómo la institucionalidad del Estado y las elites asumen el problema de los intereses del conjunto de la sociedad y aquellos de los particulares; 2) la manera cómo las elites se posicionan frente a los cambios en el entorno económico internacional y cómo adoptan, asimilan y promueven una cierta ideología del desarrollo.

Una advertencia todavía para terminar este preámbulo. El campo particular de la ideología del desarrollo no es fácil de definir en dos palabras, por la variedad de versiones vehiculizadas en la simple importación, por las adaptaciones o deformaciones que esas versiones sufren, y también por la producción autóctona de ideas acerca del tema (Del Pozo, 1986). Por lo mismo, para efectos de este trabajo se empleará la definición de desarrollo más arriba enunciada -que consiste en identificarlo con el proceso de modernización de las sociedades occidentales- mientras que los contenidos ideológicos seleccionados serán aquellos ligados a los fines y medios políticos a través de los cuales puede concebirse una transformación consecuente de las estructuras económicas y sociales.

## CHILE

El rasgo más sobresaliente que caracteriza el comportamiento actual de las elites dirigentes chilenas, con importante efecto de impacto sobre el comportamiento de los sectores sociales, es fuera de toda duda, el elevado índice de consenso en torno a lo que se ha dado en llamar el "modelo chileno". En los últimos días del mandato del Presidente Aylwin, el diario El Mercurio, vocero prestigioso de la derecha política y de los círculos financieros, pareció haber encontrado la expresión exacta para dar cuenta de lo que constituye la pieza clave de los éxitos de la economía chilena cuando bajo el título de "La Concertación legitimó la economía de mercado"

comentó el balance global de la gestión de gobierno hecho en declaración pública por uno de los ministros más prestigiosos del gobierno saliente.

El consenso interno chileno en cuanto a las grandes líneas del desarrollo perspectivo de la economía y de la sociedad es un tema a propósito del cual se habla poco en el extranjero y más bien permanece como oculto detrás de lo que es presentado mucho menos como consenso, es decir, como resultado de una racionalización de la política, que como una suerte de connivencia, o en una formulación más extrema, como una suerte de complicidades múltiples: de los dirigentes democráticos con los antiguos responsables o partidarios del régimen dictatorial, de la clase política gobernante con los círculos del capital internacional, etc. En la opinión de algunos, todo ello no iría sino en desfavor de los sectores empobrecidos de la población, con lo cual se sugiere que la bonanza económica reflejada en las cifras no sería más que un espejismo, es decir, no estaríamos frente a un nuevo modelo de regulación nacional del desarrollo, dotado de capacidad de integración social y apto para asegurar el mediano y largo plazo.

Lo cierto es que, si ya nadie duda de las virtudes de la estrategia económica heredada de la dictadura puesto que el país muestra a lo largo de varios años buenos resultados en términos de indicadores económicos (PIB, comercio exterior, tasa de inversión, ingreso familiar, empleo, etc.), es menos frecuente oír, o leer, que en ese país se ha ido

afirmando, con la transición democrática, un modelo de reproducción de la formación social dotado de suficientes elementos ya estabilizados como para imaginarlo teniendo vigencia a lo largo de un período prolongado. Un hecho significativo, que tiene que ver con un cierto "clima" de opinión reinante en el país, es que ni en el lenguaje oficial ni en el lenguaje popular hay traza del término malhadado de **reajuste estructural**, tan en vigor en otros países del continente. Este concepto corresponde al pasado. Tal vez por eso mismo, no es la política económica de corto término la que inquieta hoy con prioridad a las elites chilenas y a una buena parte de la población, sino la posibilidad de fundar un desarrollo sustentable sobre la base de un modelo que ha hecho su camino y que parece garantizar el futuro. El gran debate de hoy gira entonces en torno a cómo asegurar lo ya ganado y seguir avanzando, o en otras palabras en cómo asegurar el desarrollo a largo plazo. Es aquí, precisamente, que encuentra su explicación y adquiere su fuerza de convencimiento el bloque hegemónico "centrista" que domina la política chilena de la post-dictadura (Concertación Nacional + sectores independientes + un sector de derecha), expresión en el plano político de la voluntad de consenso en torno al modelo.

Ahora bien, en torno a qué estrategia de desarrollo económico se "organiza" ese consensus político chileno? Dos orientaciones íntimamente ligadas aparecen: por un lado, una apertura total hacia el exterior y, por otro, lo que yo

llamaría una “articulación dispersa” a la economía mundial, es decir, dos componentes esenciales de una estrategia que es el polo opuesto al ciclo de “protección centralizada” que hizo crisis en los años 70, y que hace de Chile en América Latina el primer país en internacionalizar abiertamente su economía. Tocamos aquí el aspecto central de la política económica chilena inaugurada por los militares en la década del 70, el mismo que será determinante en el éxito del neo-liberalismo en el país.

El itinerario completo de este primer ejemplo exitoso de recomposición en profundidad de una economía latinoamericana ha sido el siguiente: aplicación sistemática del principio de subsidiaridad del Estado, prioridad a una estrategia de economía abierta, prioridad a los acuerdos bilaterales, rearticulación geográfica de las relaciones económicas y comerciales, búsqueda selectiva y/o puntual de los “partenaires” tecnológicos. Los tres últimos puntos son a mi juicio claves en el éxito del modelo de rearticulación a la economía internacional porque, bien miradas las cosas, se puede privatizar el Estado, se puede abrir las fronteras, pero si hay carencia de lógica nacional de rearticulación a la economía mundial acompañada de una ausencia de voluntad política, no es nada evidente que los resultados vayan a ser los mismos...

¿Cómo es que esta revisión radical del proteccionismo económico y la nueva apreciación del entorno internacional tuvo lugar? La pregunta es pertinente porque, en buena cordura, ir a buscar

socios comerciales o tecnológicos a países tan lejanos como el Japón, la China, Australia, Sud Africa, o Israel, no es acaso algo que semeja a un salto en el vacío de un pequeño país perdido en los confines del mundo? Para quien revise la historia económica de Chile será sin duda menos sorprendente esta especie de “fuga” desde los lugares seguros y desde las certidumbres, emprendida por los círculos dirigentes que colaboraron con los militares. Verá que no hay aquí nada de misterioso sino que una suerte de repetición histórica, en la cual no por la primera vez los dirigentes políticos, enfrentados a un gran desafío y respaldados por algunos sectores económicos en emergencia, iban a responder al imperativo de un “proyecto nacional” en el cual la constante fuerte no es otra que el rechazo del aislacionismo y la búsqueda inquieta y tal vez angustiada de articulación al mundo, entendido este como un vasto mundo.

Si un leit motiv existe para la clase dirigente chilena desde los comienzos del siglo XIX ese no es otro que la voluntad de construir un Estado en forma, fórmula cara a los hombres políticos, a los juristas y a los historiadores del siglo. El Estado-proyecto, en el espíritu de los patriarcas fundadores de la república, es una construcción política coherente, responsable, dotada de autoridad, de soberanía territorial efectiva y de potencia económica. Es el Estado Portaliano (en referencia a Diego Portales, ministro omnipotente entre 1830 y 1837) creado por la constitución de 1833 y cuya idea matriz es la de un prototipo

de Estado-nación con capacidad de integración nacional, dotado de un sistema de partidos fuertes, y donde el Estado debe ser no sólo fuerte y centralizado sino también "impersonal" y "abstracto" (Góngora, 1981). Otra característica mayor de esta concepción estática que ejerció una influencia evidente en la cohesión del sistema nacional, es la coexistencia de un principio y sistema de representación (partidos, Parlamento) con un principio y sistema burocrático cuya legitimidad debería fundarse en la eficiencia y en las competencias técnicas. En la prosecución de tal proyecto las clases dirigentes chilenas parecen haber dado la prueba en diversas coyunturas cruciales de una suerte de radicalismo histórico, casi fundamentalista, que podemos denominar por ahora "radicalismo desarrollista" para indicar que el proyecto de Estado institucionalmente fuerte no es viable sino con potencia económica, con lo cual la idea del desarrollo es parte de su esencia misma.

Un proyecto nacional inserto en el mundo quería decir en el siglo XIX orientado principalmente hacia Europa, pero no exclusivamente. Hacer de Chile un país con "liderazgo" en el Pacífico, consigna actual de las elites chilenas, ¿no equivale acaso a la idea de hacer de Chile una "potencia en el Pacífico", preocupación central de los gobernantes a lo largo de todo el siglo pasado? Conviene recordar a título de ejemplo, que con la expansión económica producida después de 1845, el comercio chileno con Austria, Polinesia y California al-

canzó relieves significativos y que la moneda chilena (entonces el "cóndor") se transaba en Oceanía, en Calcuta y en Shangay (Salazar Sparks, 1986). No se trata aquí de acumular los múltiples ejemplos que pueden ser extraídos de la historia chilena para argumentar la realidad de una vocación nacional de apertura que no fue totalmente aniquilada por el proteccionismo del modelo de industrialización que se implantó en los años 40, sino más bien de sugerir que una cierta "vocación nacional" se cruza a lo largo de la historia chilena con una voluntad política de "estar en el mundo". Sería difícil sin duda argumentar que la voluntad afirmada de las elites chilenas de "existir en el mundo" no debe nada a una condición de marginalidad geográfica radical. ¿Tiene eso que ver con el carácter de "última ínsula" que le acuerda su posición meridional extrema, con su realidad de país "perdido" entre los Andes y el mar, con la excepcionalidad de una fachada marítima de plus de 4.000 km?

Hay un rasgo de la historia chilena que ha pasado desapercibido y es aquel que muestra cómo la voluntad de adaptar la economía chilena a los avatares de la economía mundial hace que a partir de la convicción de esta en la "buena vía" las elites dirigentes no parecen haber escatimado esfuerzo para facilitar el éxito de la estrategia adoptada. Fue así que, cuando el país gozó de la condición de primer exportador de trigo del mundo, entre 1860 y 1890, las estructuras agrarias de Chile Central fueron sometidas a una profunda transformación

con vista a aumentar la productividad del trabajo agrícola y así aumentar los volúmenes exportables (Bauer 1975). Complementariamente, tras el mismo objetivo de aumentar los volúmenes de las exportaciones fue que el Estado emprendió la conquista definitiva, y financiera muy costosa, de los territorios indígenas de la región de la Frontera. Fue así también que, para asegurar mejor su rol de exportador mundial único del salitre (entre 1890 y 1920) el Estado chileno no trepidó en desencadenar la guerra del Pacífico en 1879, en contra de los intereses económicos y geopolíticos del Perú y de Bolivia. En fin, para afirmar una condición de exportador de cobre de primera fila el Estado no vaciló tampoco, en los comienzos de este siglo, en desnacionalizar los recursos mineros en favor de las compañías norteamericanas. Tales ejemplos argumentan en el sentido de ese radicalismo desarrollista que sería propio de las elites chilenas, las cuales, a partir de la convicción de "estar en la buena vía", no escatiman los medios, sean estos de carácter legislativo, financieros, administrativos o militares, a fin de asegurar la viabilidad de la estrategia.

Puede sugerirse, aunque sea difícil de demostrar científicamente que la condición de país gran-exportador de materias primas - que a la masividad de los volúmenes exportados ha unido siempre la diversidad de las clientelas-, contribuyó a crear en la burguesía chilena (estrechamente imbricada a la actividad del Estado) una aptitud particular a la apertura que la habilita para sensibilizar

muy temprano los virajes históricos en la economía internacional, o mejor dicho, el momento de pasaje de un ciclo económico a otro. La aparición temprana de un cuerpo de ideas coherentes a propósito del desarrollo relativas al esquema de la industrialización por sustitución de importaciones, tiene que ver sin duda con esa capacidad de apertura.

A la vocación aperturista se une la voluntad política. Cuando se revisa la literatura económica y política de los años 40 llama la atención, en efecto, el unanimismo de los círculos económicos y políticos dominantes respecto de la necesidad de tener éxito en la implantación de un modelo de desarrollo que respondiera a la nueva situación mundial derivada de la guerra y del proteccionismo en expansión (Del Pozo, 1986). Es así que, teniendo en vista la necesidad del desarrollo nacional, de la modernización de la sociedad y de una más grande justicia social, en los años 30 y 40 la casi totalidad de la clase política se adhiere a la línea maestra de un modelo económico que era juzgado como indispensable para la regulación nacional en el nuevo ciclo de la acumulación capitalista: industrialización nacional, rol preponderante del Estado en la economía, formación de cuadros para la gestión del desarrollo y para la administración de las empresas del Estado.

Así como en la segunda mitad del siglo XIX los partidarios del librecambismo objetaban cualquier incremento del poder central fuera este de tipo económico o político, llegando algunos de sus sostenedores a postular la elimina-

ción pura y simple de las aduanas para mejor asegurar la economía del país (Veliz, 1961) así también, a partir de 1940, se impondrá el proteccionismo y el rol preponderante del Estado central. Pero, a juzgar por estudios recientes, no debe aquello interpretarse como resultado de un brusco y sorpresivo golpe de timón, pues se sugiere que ya antes de 1938 los hombres políticos y empresarios de la derecha estaban convencidos de la idea de la planificación de la economía y de la intervención del Estado. En todo caso, los años que precedieron al triunfo del Frente Popular, y los años que van a seguir, fueron de vivo debate y de popularización de lo que puede ser considerada como una verdadera ideología del desarrollo. En esos años el Estado es visto como "una gran empresa" y los nuevos gobernantes como "sus gerentes y administradores" según la expresión del presidente Pedro Aguirre Cerda (Salazar, G., 1987).

El andamiaje jurídico e institucional proteccionista iba a ser fortalecido con un sistema educacional Ad hoc, cuyos objetivos se identificaban completamente con el designio estatista: entrenar a las elites gobernantes en la implementación de planes de desarrollo "científicamente" modelados, formar una camada de líderes intermedios, de tecnócratas del Estado y también de asesores manejando las técnicas de control de las conductas sociales. Más ampliamente se trataba de educar a la ciudadanía para participar en la economía del mercado nacional, en los planes estructurales de desarrollo

y en una forma cohesionada de nacionalismo (Salazar, G. 1987).

Precisamente, sobre tales postulados el Frente Popular pudo beneficiarse de un amplio consensus que iba desde los liberales (jefes de empresa, y sectores del patronato agrícola modernista), radicales (dueños de empresas, capas medias empresariales y ligadas al Estado), socialistas (capas medias y sectores obreros de la industria). Solamente los sectores más recalcitrantes de la oligarquía en declive se mantuvieron apartadas de lasintonía desarrollista. Haciéndose concesiones recíprocas, esos partidos políticos y sectores sociales aseguraron la estabilidad de un bloque de poder, la gobernabilidad del país y la gestión del modelo económico industrializante en el decenio crucial de los años 40. Si al fin del decenio la alianza "frentista" es rota por la expulsión del Partido Comunista, no es menos cierto que el amplio consensus de los actores económicos y de la clase política en torno a la industrialización no se resentirá seriamente sino a finales de los 50, dando con ello inicio a una segunda fase de gestión del modelo, esta vez sobre un fondo de fuerte polarización ideológica y acentuación de rasgos populistas al interior de un sistema político que sigue siendo dominado por grandes formaciones (Valenzuela, 1989).

Como quiera que sea, las grandes formaciones políticas iban a sufrir el impacto de la "guerra fría" y de la apertura de la nueva pista que hipotéticamente debía conducir también, o más rápido,

al desarrollo: el proyecto socialista revolucionario. Y así, la hiper-ideologización de la vida económica y social iba a anular toda posibilidad de encontrar un recambio al modelo de regulación de la economía y asegurar la sobrevivencia del sistema democrático.

Efectivamente, si a la distancia se vuelve sobre el modelo económico enterrado en 1973 y si se insiste sobre el rol de la ideologización excesiva y los dogmatismos que ella estimuló, se está en mejores condiciones para calibrar los verdaderos alcances de la crisis de los años 70. También, se pueden mejor evaluar los cambios cualitativos entre los decenios del comienzo del modelo y de su afirmación (marcados por el consenso político amplio) y el período que corresponde a los fines del 60 y la década del 70, marcados por la crisis y la bipolarización de la vida política. Es a esta lógica de confrontación que debe atribuirse la incapacidad de la clase política de los comienzos de los 70 a inflexionar un modelo de desarrollo que mostraba ya en la década anterior los signos de la fatiga y sobretodo una débil capacidad de adaptación a la evolución de la economía internacional, mientras que al mismo tiempo perdía esa capacidad de integración social que tuvo en los comienzos.

De todas maneras, es sin duda de importancia para nuestra demostración que si la cultura política de la alternancia democrática, en la competición y en la polarización según Valenzuela (1989), hace crisis en los inicios de los 70, ella lo hace en función de grandes designios

nacionales: en uno y en otro bando de los que se polarizan la ideología del desarrollo permanece fuerte, unos con el socialismo otros con el capitalismo. Es cierto, con el tiempo, es posible hacer una evaluación más ponderada y objetiva y distinguir entre el realismo de los unos y el utopismo de los otros. Así, el gobierno demócrata-cristiano del presidente Frei se nos aparece bajo otro prisma: parecía destinado a provocar el viraje indispensable a la modernización de estructuras y a ser el artífice de una nueva articulación económica internacional, tareas que efectivamente inició en los años 1965-1966, pero interrumpidas por la imposibilidad de obtener el consenso político indispensable: la continuidad de su acción se demostró políticamente inviable pues las posibilidades políticas de gobernar al "centro" no existían.

Hemos hecho una vuelta un poco larga, pero necesaria, para entender mejor el signo del reencuentro democrático que se opera, pasados los años de dictadura militar, de las elites chilenas con una cierta cultura política que es parte sustantiva de su patrimonio histórico. Esas elites plurales se reencuentran hoy con una cierta facilidad, casi con desenfado, en torno a un modelo económico que redinamiza la economía y la sociedad en una nueva articulación al mundo. Por un lado, el "renacimiento" de la izquierda política, impulsado fundamentalmente por una elite dirigente formada en el exilio, significa que ella se libera del maniqueísmo de la época del golpe militar y se transforma en una "*cultura política*

*particularmente abierta y sensible al mundo y a los desafíos de la modernidad*" (Tironi, 1993). Esta izquierda renovada hace conjunción con la nueva generación de cuadros políticos y empresariales salidos de las filas de la burguesía, producto de lo que debe ser considerado como un proyecto estratégico de renovación de clase, cuyos primeros exponentes fueron los economistas llamados "Chicago-Boys" (Ruiz, C., 1984).

En efecto, el neo-liberalismo como ideología hace su aparición en las aulas universitarias chilenas en los comienzos del 60, un Convenio de cooperación para la formación de economistas habiendo sido firmado entre la Universidad Católica de Santiago y la Universidad de Chicago en 1956. No es sorprendente, por lo mismo, la afirmación según la cual ya desde mediados de la década del 70 el neo-liberalismo era el proyecto central de la gran empresa chilena y en especial de la gran burguesía financiera que adquiere un peso decisivo poco después del golpe militar. En la segunda mitad de la década del 80, los dirigentes de oposición que serán los artífices de la Concertación Democrática (demócrata-cristianos e izquierda renovada), comienza a adherir al nuevo modelo estratégico, proponiendo retoques, es cierto, en particular una atención particular a lo social, postulando un modelo de crecimiento "equitable". Así, teniendo como bandera el fin de la dictadura y la continuidad de la estrategia de desarrollo neo-liberal, la Concertación ganó las elecciones presidenciales de 1989.

En la actualidad Chile es gobernado por lo que bien podría denominarse un "bloque nacional centrista" (fórmula que no se aleja mucho de la idea del bloque hegemónico gramsciano), al cual adhiere la mayoría de la población. No se trata solamente del bloque social que acuerda su confianza a la alianza política de la izquierda renovada, de la Democracia Cristiana y de otros sectores medios, sino también de sectores de centro-derecha que practican de manera sostenida la política de "acuerdos" con el bloque gobernante. El centro político es amplio, política y socialmente, y es así porque se presenta como un motor dinamizador de la vida económica, política y social del país. En su adopción del modelo neo-liberal, el conjunto de la clase política chilena hace gala del mismo radicalismo desarrollista de la época libre-cambista o del proteccionismo de Estado, en el sentido de mantener el rumbo y de crear las condiciones del éxito del modelo. Como telón de fondo está la imagen del Estado en forma, "respetable", a la vez instrumento y resultado del nuevo desarrollo.

## NICARAGUA

Si tratándose del desarrollo, en el caso chileno de la post dictadura hay el reencuentro con una continuidad histórica, brevemente interrumpida, conviene saber si en el caso nicaragüense la transición actual está marcada igualmente por constantes históricas de larga duración y de que signo son ellas. A prio-



ri, podría pensarse que el período de socialismo sandinista ha contribuido a la pérdida o a la interrupción de una cierta historia, pero esta hipótesis parece difícil de argumentar.

Algo que llama poderosamente la atención en relación con Nicaragua, es que todo pasa como si después del sandinismo la vuelta obligada a las formas capitalistas se hiciese como si estuviéramos a fines de los años 70. Se tiene la impresión que las elites dirigentes, enfrascadas tanto años en los avatares de la lucha por el poder, entre Revolución y Resistencia, no han tenido tiempo de tomar conciencia del viraje histórico fundamental en que se encuentra el capitalismo mundial en su larga historia de reproducción. De manera que lo de la globalización de las relaciones económicas, de la expansión fenomenal de los intercambios y de las comunicaciones, de la informatización en los centros y en las periferias, etc. no parece sugerir gran cosa en términos de estrategia a los sectores dirigentes del país en la etapa de redemocratización. Todo esto no puede interpretarse simplemente como resultado de las urgencias, de la necesidad de la reconciliación política o de los imperativos de la reconstrucción nacional.

Sin duda, el indicio más revelador tiene que ver con lo que llamaremos la "fijación americana" de las elites nicaragüenses, queriendo decir con esto que en ellas domina una manera espacialmente limitada de verse en el mundo, expresada en un empeño tenaz por circunscribir su posicionamiento interna-

cional. Hay aquí como una reacción refleja del pasado, de ese slogan que por ser metáfora no es menos real y que parece haber marcado a fuego a los centroamericanos: la figura del "patio trasero" de los EEUU. Es como si el éxito de la transición comenzada, o que el futuro más lejano por construir, no pudieran ser vistos sino en una relación fatal con los Estados Unidos. En todos los casos los EEUU, más que países subordinados, financieramente costosos, están prefiriendo los socios comerciales y los empresarios dinámicos y desde sus intereses geopolíticos actuales desearían más bien un retiro de su presencia política y una disminución de sus gastos tipo "Ayuda a Centro-América", confiando la articulación de la región a las relaciones con el mercado norteamericano, es decir, a los sectores privados (Saldomando, 1993). Mientras tanto, otros análisis provenientes de las ciencias sociales centroamericanas estimulan todavía una visión que se nutre de ese marcado determinismo geográfico.

El hecho de que el mundo de los años 90 represente otro contexto geopolítico, que se viva efectivamente un mundo multipolar, que se pueda hablar de la existencia de varias "periferias" y de varios "centros", dejando entrever todo ello que en las condiciones de hoy, no importa que país puede mejorar de posición, cambiar su pertinencia a grupos regionales e incluso hacer desplazamientos en una u otra dirección internacional (kolossov, 1993), todo ello parece escapar a la percepción de los leaderships e intelectuales nicaragüenses.

La "fijación americana" se acompaña de otra no menos frustrante: la "fijación integracionista". Esta es de signo regional, de cierta manera la otra cara de la misma moneda, pues representa una búsqueda de contrapeso a la subordinación al Norte anglosajón. Como sucede en otros países de la región, excepción hecha de Costa Rica, las elites nicaragüenses sufren de ese determinismo regional marcado que neutraliza considerablemente la reflexión y las políticas en torno a la nueva articulación a la economía-mundo. Tal estado de espíritu proviene, sin duda, más de una historia real de dependencia económica y política prolongada que de un determinismo geográfico derivado de la localización o de la escala modesta del país. ¿Es que esa historia no está cambiando?

El primer problema que plantea la integración es que los países centroamericanos han mostrado en el pasado, y siguen mostrando hoy, grandes dificultades para llegar a consensos políticos viables: el segundo, es que las instancias integracionistas han sido y son víctimas de una tecnocracia internacionalizada poco eficaz, por lo mismo que el bloque integracionista tiene una historia de frustraciones; y el tercero, seguramente el fundamental, es que se trata de una asociación de países que están localizados, por así decirlo, en la última periferia subdesarrollada y que comerciando entre ellos, intercambiando entre ellos, si bien pueden hacer economías de escala tienen poco que ganar en términos tecnológicos, de información y transmisión de saber y, en general, en términos

de modernización. En este sentido, la visión nicaragüense es totalmente opuesta a la visión chilena de articulación económica internacional, pues insiste en negociaciones en bloque, no solamente para la "liberalización de los mercados" sino también para la cooperación económica y tecnológica.

Estas ideas fijas con las cuales se ha construido el imaginario de las elites y de las sociedades centroamericanas, van a contra-corriente de los procesos internacionales en curso, marcados como ya dijimos por la globalización, por la liberalización de los mercados, por la dispersión geográfica de las clientelas, y por el lugar de privilegio asignado a los procesos de potenciación de las sociedades locales. Que la mundialización del mercado trastoque los viejos conceptos y las viejas interconexiones, que las nuevas posibilidades de los lugares de participación en el desarrollo resten fuerza al argumento de la talla del país como freno, todo ello parece escapar a unas elites dirigentes que, fuertemente condicionadas, registran con dificultad las nuevas tendencias y los nuevos contextos geopolíticos.

El programa de la Unión Nacional de Oposición (UNO) expuesto en las elecciones generales de 1990 es muy ilustrativo de esta ausencia de perspectiva estratégica: no hay en realidad ninguna mención al desarrollo en el mediano y largo plazo, la candidata Violeta Chamorro habiendo elegido como tema casi exclusivo de su campaña el de la lucha anti-inflacionaria. Mientras tanto, del lado sandinista, el candidato Daniel

Ortega insistió sobre la capacitación técnica, sobre la necesidad de eficiencia revolucionaria, y sobre todo sobre las perspectivas de un socialismo "futuro" difícil de definir en su verdadera naturaleza, en los momentos mismos en que el socialismo real agonizaba...

El discurso económico de los candidatos a la elección presidencial de 1989 fue de carácter corto-placista, su validez para el tiempo de un gobierno. Pero todo parece indicar que cuatro años después nada ha cambiado para los círculos gobernantes. Por eso mismo, la política de reajuste estructural es vista como algo tan sólo coyuntural, totalmente desligada de los desafíos del largo plazo, de la necesidad de avanzar hacia la definición de un modelo de desarrollo sostenido. La visión cortoplacista de la UNO (ubicada en la oposición luego de su ruptura política con la presidenta Chamorro) es la misma del equipo gobernante actual (ahora con el apoyo oficial sandinista), y es la misma también de la dirigencia sandinista. Las cosas parecen girar en redondo! Cuando del lado sandinista, el general Humberto Ortega para justificar el "pacto" nacional, y justificar también la política de gobierno resistida por los sectores sociales, define las etapas de la acción oficial en una secuencia estabilidad política-estabilidad económica-recursos externos- reactivación nacional, ¿no está, de manera casi mecánica, formulando una secuencia de reajuste que ha devenido banal en muchos países, los cuales no logran, sin embargo, encontrar la pista del despegue?

Conviene entonces abandonar un poco la coyuntura para tratar de entender el por qué de la ausencia de proyecto nacional para el mediano y largo plazo en Nicaragua. En realidad, todo parece ocurrir como si el "interregno" sandinista hubiera impedido la reconversión de las elites hacia la modernidad, o, en términos más restringidos hubiera provocado en los sectores económicos dirigidos y en la clase política una discontinuidad en la sensibilización, en la práctica y en la visión de conjunto del desarrollo capitalista reciente. ¿Pero esta ausencia de perspectiva es solamente el resultado del interregno sandinista?

Si se mira hacia atrás en el tiempo, la ausencia de proyecto nacional de desarrollo no es exclusiva de este período de transición pues tiene sus antecedentes en una cultura política que viene de antes de la revolución sandinista, desde antes mismo del somocismo. Diversas fuentes, entre ellas los trabajos recientes de Vilas, muestran cómo la historia de Nicaragua es una historia de querrelas, competencias y conflictos violentos entre grupos de grandes familias en la lucha por favorecer sus intereses y negocios particulares (Vilas, 1993). Dentro de su lógica, este esquema político no exigía una visión superior del interés nacional y por lo mismo no era una necesidad imperiosa la de dar continuidad a un proyecto estratégico nacional. La permanente falta de unidad del poder interno no solamente ponía en juego la estabilidad del Estado sino también las relaciones externas de poder, debilitando la capacidad nacional de negociación

al nivel internacional. En caso de necesidad, los bandos familiares recurrían al apoyo de los EEUU, o de círculos económicamente poderosos de ese país (Baillon, G. 1991) alternándose en los favores del Norte según las coyunturas políticas internas.

La lógica de funcionamiento de los grupos políticos, no correspondía entonces al esquema del Estado en forma, con vocación de afirmación histórica nacional, sino a un **Estado de tipo patrimonial**, cuya vocación primera era favorecer los intereses particulares de diferentes fracciones burguesas. El Estado aparece así como confiscado, ocupado en momentos distintos por alianzas de linajes fundadas en interconexiones familiares, o en intereses pasajeros que permitan la superación de las contradicciones entre ellos (Vilas, 1993). Durante el régimen sandinista los grupos de las grandes familias fueron afectados diferentemente en sus intereses económicos y obligados a posicionarse frente al sistema revolucionario. Esquemáticamente podría decirse que los pocos “desarrollistas”, es decir, los representantes de los sectores más dinámicos vinculados o favorecidos por el régimen de Somoza, tomaron el camino de la oposición radical y/o del exilio, mientras que los grupos más tradicionales -los granadinos y otros vinculados- prefirieron el camino de la colaboración y porque no decirlo, de una verdadera táctica de “infiltración” del régimen por la vía de asumir altas funciones en el Estado y por la ocupación de altas responsabilidades en el FSLN. Si se sigue a Gabriel Zaid

(1985) en su descripción de las relaciones políticas entre los comandantes en la cima del poder sandinista -las que estuvieron marcadas por “el regateo privado” para eludir pérdidas de posiciones personales-, habría que aceptar que la lógica de funcionamiento del sistema clásico tradicional fue muy bien asimilada por la elite sandinista.

Hoy, en los años de gobierno de la presidenta Violeta Chamorro, el peso de las familias tradicionales y de sus redes sigue siendo fuerte dentro de la burguesía nicaragüense y al interior del Estado, “a ambos lados y por encima de las profundas divisiones políticas e ideológicas que fracturaron a la sociedad en el pasado reciente”, según Vilas en su artículo ya citado. La proliferación de partidos políticos (24 formaciones al inaugurarse el régimen democrático) puede también ser interpretada bajo este prisma. El autor antes citado va más lejos todavía, para sostener que la presencia de las familias notables a -ambos lados de los bandos en pugna en la sociedad nicaragüense contemporánea-, han jugado como un colchón de moderación de las presiones políticas externas y que sus interconexiones “*tejen una red defensiva hacia los primos sandinistas y las esferas de poder institucional que conservan*”. En reciprocidad, el sandinismo devuelve la mano con su contribución relativa a la estabilidad institucional del gobierno Chamorro.

La continuidad de comportamiento clásico de las elites ha sido señalado por diversos observadores no solamente neutralizando una política de potenciación

nacional sino que, según un investigador holandés, determinando *"la organización del proceso político como una lucha por las cuotas de las rentas de la ayuda externa"* (Bastiaensen, 1993). Más adelante veremos cómo el Protocolo de acuerdo firmado entre gobierno sandinista y oposición para facilitar el acceso de Violeta Chamorro a la primera magistratura, y cómo el "pacto de gobierno" que selló a poco más de dos años de gobierno la recomposición de las alianzas políticas, llevan la impronta de la lógica tradicional del "regateo en privado", y determinan una ineficacia gubernamental considerable.

Queda la pregunta relativa a la existencia o inexistencia de una visión sandinista del desarrollo en la transición. La primera observación que conviene hacer es que, enfrascada en las tareas revolucionarias y de construcción del socialismo la elite sandinista no tuvo ni el tiempo ni el interés para una reflexión a propósito del desarrollo en el capitalismo. Para los sandinistas, el pasaje del socialismo al capitalismo no estaba en el calendario, y puede decirse por lo mismo que para ellos existe un *hiatus histórico* entre la era capitalista del somocismo, marcada por el ciclo tardío de la industrialización sustitutiva de importaciones, y el período actual de la globalización.

Para aumentar esta afirmación, ¿qué mejor prueba que la política seguida en relación con la privatización de empresas del área estatal? Como es sabido, junto con el tema de la paz y la reconciliación nacional, el tema de la privatiza-

ción de las empresas del área de propiedad del Estado ha sido central en la vida política y social nicaragüense post-sandinista. El "forcing" entre los partidarios más radicales de la privatización y el sandinismo duró casi dos años; es decir hasta que el gobierno dio por terminado el proceso en febrero de 1993. Las discusiones estuvieron cargadas de tensión política, de movilizaciones sindicales, de paros, etc., todo ello después que la experiencia vivida por el sandinismo en el poder mostró hasta que punto el problema de la acumulación capitalista en tiempo de crisis puede ser, pero no es necesariamente, un problema de propiedad de los bienes de producción.

El encarnizamiento con el cual el sandinismo se dedicó a la defensa de las empresas estatizadas para impedir su privatización y luego exigir su traspaso a los trabajadores habría podido, seguramente, ser morigerado en beneficio de una política global más realista si sus líderes hubiesen estado atentos a la experiencia internacional. Lo ocurrido con la reconversión industrial en Chile y en algunos países europeos tiene, sin embargo, valor de enseñanza. La reconversión industrial llevada a cabo en Chile por los economistas neo-liberales fue realizada en los años 70, no sin confrontación aguda con los intereses de los propietarios de empresas, y por cierto en el marco de una fuerte represión de los trabajadores. Ellos lograron dismantlar en poco tiempo la mayor parte del aparato industrial considerado como tecnológicamente atrasado (principalmente textiles, industrias de bienes intermedios,

metalmecánica, etc.) y se puede argumentar que esta política de shock aplicada en la época militar pudo haber sido conducida de una manera gradual evitando los efectos sociales agudos, pero ello no cambia en nada el hecho que se descubría de un golpe que la supuesta sub-utilización de la capacidad industrial instalada, atribuida a menudo a la mala fe del sector patronal, correspondía en realidad en gran parte de un stock de tecnología no rentable.

En el caso del aparato industrial nicaragüense, sobretudo de las industrias extractivas, se sabe que el handicap tecnológico es enorme y todo el mundo está de acuerdo en que los obreros/propietarios enfrentarán enormes dificultades con una maquinaria industrial no solamente obsoleta sino deteriorada por una prolongada falta de mantenimiento. Todos los expertos piensan que es indispensable llevar a cabo un proceso de reconversión industrial en profundidad el cual no podría ser solventado sino con las subvenciones del Estado, con lo cual se pondrá en marcha un esquema de gestión industrial que es abandonado en todos los países que enfrentan la salida de la crisis de manera realista. Resultado previsible: una reconversión industrial retardada y una insolvencia permanente de los nuevos patrones. La pregunta parece obvia, ¿valía la pena tanta inversión de energía a lo largo de dos años en torno a la forma de propiedad de esas empresas para resultados tan dudosos, postergando al mismo tiempo grandes tareas nacionales de reconstrucción económica?

Como resultado de las largas y difíciles negociaciones conducentes a la privatización, los obreros y empleados de las empresas públicas fueron beneficiados con la adquisición del equivalente de 25% de las acciones de las 233 empresas afectadas, mientras que a los soldados desmovilizados se les acordó el 18% (INFORPRESS, 18/02/93). Estas cifras muestran que la batalla por la propiedad industrial fue relativamente ganada por el sandinismo, pero esa victoria se asemeja mucho a una victoria pírrica para los propios interesados.

Que el FSLN no tiene una estrategia de desarrollo quedó más que en evidencia en el Congreso de Julio de 1992, donde las expectativas de miles de militantes y simpatizantes quedaron frustradas. La discusión ideológica en torno a las exigencias de la transición no estuvo en la agenda y, como lo había adelantado el Comandante Tomás Borges poco antes de la inauguración del evento, el Congreso fue "más político que ideológico". En todo caso, la mayor parte de los observadores estuvieron de acuerdo en que el saldo de las discusiones fue una intrincada madeja de posiciones, criterios y actitudes muy heterogéneas, "*cuyas coordinadas ideológicas eran difíciles de precisar*" (Pensamiento propio, julio 1992).

El FSLN no parece estar en condiciones ideológicas, y tampoco orgánicas, de definir una estrategia susceptible de asegurar la renovación del crecimiento capitalista en las nuevas condiciones exigidas por la acumulación a la escala mundial. Pero eso no le impide

participar de una cuota poder “desde arriba”, por la vía de los mecanismos clásicos conocidos, y aferrarse a un estatuto de fuerza de apoyo al funcionamiento institucional, reivindicando al mismo tiempo, para la política “desde abajo” una condición de fuerza opositora. En términos de las decisiones importantes a propósito de la economía todo esto se traduce en una actitud de neutralización de la decisión política.

Si el ejemplo anterior, relativo a la confrontación sobre la forma de propiedad de las empresas es desde ya muy significativo del efecto paralizante del “pacto pata gobernar”, es menos importante sin duda que las dificultades de los actores políticos y económicos para llegar a un acuerdo a propósito de la negociación de la deuda externa. La ausencia de consenso entre el sandinismo y el gobierno Chamorro ha hecho que el problema de la deuda externa no haya sido todavía resuelto a fines de 1993, en el sentido de fijar de una vez por todas un “esquema de pago razonable” y mientras tanto, como lo precisa Bastiaensen, *“no se vislumbran espacios ni políticos ni económicos para una estrategia viable”*. Mientras tanto, todavía en 1994, la principal fuente de recursos de Nicaragua sigue siendo la ayuda internacional, y el país pone sus esperanzas en la buena voluntad de los “países donantes”. Recién en diciembre de 1993 el gobierno daba a conocer una Agenda Social (que refuerza la llamada “red de protección social” para resguardar a la población más vulnerable), destinada a preparar el terreno para las conversacio-

nes con los organismos de crédito internacional para la reactivación económica...

A los factores citados, que minan la credibilidad del gobierno frente a la comunidad internacional, se une la ineficacia en la ejecución de los programas: según fuentes no oficiales sólo entre un 37% un 53% de los fondos aportados por la ayuda y la cooperación internacional habían sido gastados en octubre de 1993. El gobierno se ha defendido argumentando una cifra de 76% la cual según el ministro de la Acción Social iba a ser “la más alta en los últimos tres años”. Es así como el tema de la “irresponsabilidad política” y de “desorden” devienen fórmulas recurrentes en el lenguaje de los observadores y de los investigadores en ciencias sociales (títulos recientes de ENVIO: “irresponsabilidad política frente al colapso”, “la clave es la indefinición”, “ayuda externa” a dónde vas?...). Pero estas expresiones no expresan más que una constatación de hechos reales y el problema no es explicado, porque como lo hemos ya dicho no tiene explicación solamente a partir de la coyuntura sino en la historia de una cultura política que se reproduce teñidamente a través de los múltiples avatares de la sociedad nicaragüense.

En el tiempo transcurrido de gobierno de transición, a la búsqueda de la sobrevida política el FSLN ha operado objetivamente con la misma lógica de los clanes familiares, regateando su apoyo al gobierno en función de una estrategia de *primum vivere*. Es cierto que el “regatco” es presentado de una ma-

nera tal que se identifica con la defensa de las "conquistas sociales de la revolución" y sobretudo con la defensa de los sectores sociales económicamente más débiles. Nadie podría negar que hay mucho de esto, pero no por ello es menos cierto que por medio de esta táctica el Frente asegura relativamente su propia sobrevivencia y conserva la esperanza de volver a ser fuerza hegemónica.

En cuanto a las razones públicas de justificación del pacto neutralizante, ellas parecen convincentes a simple vista, pero lo son menos en función de tres consideraciones que me parecen pertinentes: la primera, porque no puede haber mejoramiento sostenido de los sectores populares sin una redinamización de la acumulación capitalista; la segunda, porque es muy probable que las clases empobrecidas nicaragüenses hayan alcanzado ya el umbral más allá del cual no se puede ir, y es bien probable que sobre la base de las iniciativas espontáneas y de las ayudas solidarias hayan comenzado a detener la degradación, y porque no, a obtener un mejoramiento relativo de su situación socio-económica; y la tercera, porque es dable pensar que detrás de la defensa de los "sectores más pobres" de la población se desliza principalmente la defensa de ciertos sectores medios, especialmente de aquellos ligados a las empresas y a la administración del Estado, territorios privilegiados del reclutamiento de la militancia sandinista.

## CONCLUSION

Para tratar de entender las respuestas que cada país adopta frente al desafío del nuevo desarrollo hemos centrado nuestro interés en el comportamiento de los liderazgos políticos y en la selección de opciones que realizan las elites nacionales, sin olvidar que la historia es rica en hechos fortuitos y contingentes y que, por lo mismo, las posibilidades explicativas y también las variantes explicativas están lejos de ser agotadas.

La conclusión más importante que emerge de lo dicho es que respondiendo a especificidades de la cultura política que cada formación social nacional ha desarrollado o estimulado a lo largo del tiempo, la forma de entender el pacto político en la transición de un ciclo a otro de la historia económica adquiere connotaciones diversas, a veces radicalmente opuestas. Mientras en Chile la Concertación para la Democracia ha permitido la consolidación de un amplio y estable centro político de signo positivo para el desarrollo, en el caso de Nicaragua el Protocolo de transferencia del mando presidencial así como el "pacto de gobierno" han originado la instalación de un esquema político inestable y de signo neutralizante. El comportamiento de las elites es históricamente divergente en los períodos cruciales de transición a otro orden económico: en un caso se observa que la prioridad es otorgada al consenso político



mientras que, en el otro, las divergencias no logran ser superadas oportunamente en beneficio de un proyecto nacional, determinando de tal suerte una vez más una “entrada tardía” al nuevo ciclo.

**La adhesión más o menos generalizada que las élites acuerdan a un determinado esquema de desarrollo aparece igualmente determinante en la disposición a asumir y a realizar la gestión del nuevo ciclo de la economía.** En Chile ella ha pasado, históricamente, por un debate de ideas, por una difusión relativamente amplia de un discurso desarrollista que en cada circunstancia ha motivado a sectores diversos de la sociedad. En Nicaragua este proceso histórico es inexistente, al menos hasta donde el estado de la investigación permite afirmarlo. Es cierto que los sectores democráticos chilenos de los años 80 “se encontraron” por así decirlo con el nuevo modelo de desarrollo ya relativamente afirmado, pero ello no le resta mérito a la Concertación puesto que sus líderes entendieron oportunamente que la estrategia neo-liberal correspondía al interés del desarrollo nacional. El esquema político de la Concertación no deja de tener críticos, es cierto, pero convendría hacerse la pregunta de lo que pudo haber sucedido si, una vez en el gobierno, la alianza democrática hubiera echado por la borda la política neo-liberal. Sin duda se habría creado una situación catastrófica. La decisión de legitimar el modelo de desarrollo diseñado por el régimen militar pero inflexionándolo a fin de res-

ponder a las demandas sociales, no es más que el indicio de que el “modelo chileno” se adapta y tal vez se afina, por así decirlo, pasando a otra fase de gestión de la regulación social.

**Tercera conclusión importante: la ideología del desarrollo de las élites aparece íntimamente ligada a una concepción geopolítica.** En el caso chileno, como lo vimos al comienzo de este trabajo, una concepción geopolítica incorporando vastos espacios ha pasado a constituir para integrante de la esencia misma del Estado, mientras que Nicaragua a lo largo de su vida republicana, excepción hecha del interregno sandinista, se ha visto en parte impedida -por los EEUU- y en parte se ha prohibido a sí misma apostando a la integración regional- de tener su propia concepción geopolítica.

Antes de terminar, dos observaciones. La Concertación chilena se encontró con una sociedad en recomposición, después de los duros golpes de la dictadura y del precio pagado por la imposición autoritaria del neoliberalismo, circunstancia que ha favorecido la acción gubernamental.

Casi al mismo tiempo que la izquierda chilena realizaba su viraje ideológico en profundidad y que los éxitos de la política económica de la nueva estrategia empezaban a sentirse, los sectores populares iniciaban también su viraje abandonando gradualmente su connotación fundamentalmente contestataria y reivindicativa frente al Estado y transformándose, en buen número, en actores creativos y participativos.

En Nicaragua las cosas pasan de otra manera. El gobierno de transición se encontró con que el tejido social nicaragüense estaba profundamente deteriorado. Los costos sociales del experimento sandinista y de la guerra habían sido enormes. Es a no dudarlo *“uno de los países que perdió la década de los 80”*. De manera que, si el FSLN o cualquier otro bloque político renovado y cohesionado, se plantea verdaderamente el futuro desarrollo nacional, y no solamente la defensa de interés restringidos, deberá trabajar fundamentalmente en tres frentes: en la modernización de la cultura política que sigue siendo tradicional y frustrante (y que pasa necesariamente por un gigantesco esfuerzo educacional y cultural), en la emergencia de una ideología del desarrollo co-

herente (que integre los datos de la globalización) y por fin, en la recomposición del tejido social nicaragüense (insistiendo más en los elementos articulantes creativos que en la reivindicación estricta).

Desde un punto de vista más general, nos parece que el ejercicio comparativo al cual aquí nos hemos librado, independientemente de los cuestionamientos que el puede suscitar, ilustra el interés metodológico de enfrentar los desafíos intelectuales y científicos planteados por los nuevos procesos en curso en América Latina a partir de la definición de **dominios de reflexión, abordables a partir de ángulos diversos**, a veces insospechados, campos de intervención de los más diversos intereses disciplinarios.

#### **REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS**

Naisbitt, John, *Megatrends*, Warner Books, New York, 1984.

Beaud, Michel, “Sur le système-monde et l’économie mondiale” in: *Cahier du GEMDEV*, n- 20, Mai 1993. pp. 8-21.

Góngora, Mario, *Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos IX y XX*, Editorial Universitaria, Santiago, 1992.

Hale, Charles, “The history of ideas: substantive and methodological aspects of the thought of Zea”, *Journal of Latin American Studies*, I, 1971 p.70.

Salazar Sparks, *Chile y la comunidad del Pacífico*, Editorial Universitaria, Santiago. 1985.

Bauer, Arnold, J., *Chilean Rural Society. From the Spanish Conquest to 1930*, Cambridge University Press, 1975. 265 p.

Salazar, Gabriel 1987, "Los dilemas históricos de la auto-educación popular en Chile", revista *Proposiciones* n-15, diciembre de 1987.

Del Pozo, José, *Les idéologies du développement au Chili à l'époque de l'industrialisation (1938-1952)*, Thèse Ph.D. Université de Montreal, 1986.

Valenzuela, Arturo, *El quiebre de la democracia en Chile*, ediciones FLACSO, Santiago, 1989.

Santana, Roberto, "Impératif de la consolidation nationale et intégration régionale en Amérique Latine" in: *Cahier du GEMDEV*, n- 14, Novembre 1989. pp. 261-272.

Tironi, Eugenio, artículo en *El Mercurio*, octubre 1993.

Ruiz, Carlos, *Las tendencias dominantes de la ideología política de la derecha chilena y la democracia: 1970-1980*. Opciones, revista del CERC, n- especial, Santiago, agosto 1984.

Saldomando, Angel, "El retorno de la AID", *l'OMAC*, n- 148, novembre-décembre 1993.

Kolossov, Vladimir, "La mondialisation comme processus spatio-temporaire dans les pays à économie de transition" in: *Cahier du GEMDEV*, n-20, Mai 1993. pp. 104-114.

Vilas, Carlos, "Asuntos de familia: clases, linajes y política en Nicaragua", *Polemica*, n-18, Sept-dic. 1992. pp.

Bataillon, Gilles, "Elections au Nicaragua: réaménagement du système des "concurrents pour le pouvoir", *Problèmes d'Amérique Latine*, n-2 nouvelle serie, juillet-septembre 1991. pp. 21-40.

Zaid, Gabriel, "Nicaragua: el enigma de las elecciones", revista *Vuelta*, México, febrero 1985.